



Asamblea General

Distr. general
4 de agosto de 2017
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

36º período de sesiones

11 a 29 de septiembre de 2017

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Informe del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, sobre su sexto período de sesiones

Nota de la Secretaría

La Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos el informe del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, sobre su sexto período de sesiones, presentado de conformidad con las resoluciones del Consejo 15/26 y 28/7. En sus resoluciones 15/26, 22/33 y 28/7, el Consejo estableció y prorrogó hasta septiembre de 2017 el mandato del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta. Al final de su sexto período de sesiones, celebrado del 22 al 24 de mayo de 2017, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta aprobó sus conclusiones y recomendaciones, que figuran en la sección V del presente informe, para que el Consejo las examinara en su 36º período de sesiones.



Informe del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, sobre su sexto período de sesiones

I. Introducción

1. En su resolución 15/26, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional, incluida, entre otras, la posibilidad de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante, para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, incluida la rendición de cuentas de estas empresas, teniendo en consideración los principios, los elementos principales y el proyecto de texto propuestos por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Tras una prórroga inicial conforme a la resolución 22/3, el Consejo, en su resolución 28/7, de 26 de marzo de 2015, decidió prorrogar el mandato del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta por otro período de dos años y medio, para que asumiera y cumpliera su mandato.

2. El sexto período de sesiones, celebrado del 22 al 24 de mayo de 2017, fue declarado abierto por el Jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien señaló que los debates y la labor de los últimos seis años habían contribuido a entender mejor el alcance de las complejas cuestiones relacionadas con las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas. La gran cantidad de información contenida en los informes de los anteriores períodos de sesiones, y los debates del sexto período de sesiones, ayudarían a elaborar y a configurar las conclusiones y recomendaciones que se presentarían al Consejo en su 36º período de sesiones.

3. El Jefe de la Subdivisión hizo referencia a los esfuerzos realizados por la Presidenta-Relatora para forjar un consenso entre las delegaciones en torno a ciertas cuestiones pendientes que habían surgido durante los períodos de sesiones anteriores, como las reuniones de los coordinadores regionales y la consulta de trabajo oficiosa celebrada el 15 de mayo de 2017, que estuvo abierta a todos los Estados Miembros. Tras la consulta se había compartido con todos los Estados Miembros un proyecto de documento de debate sobre los elementos para un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas (véase la sección III *infra*), con miras a facilitar los debates durante el sexto período de sesiones. Además, la Secretaría había preparado una recopilación de las recomendaciones dimanantes de los cinco períodos de sesiones anteriores del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, que se compartió con las delegaciones¹.

4. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el Jefe de la Subdivisión puso de relieve la importancia de asegurar que no existiera ninguna laguna en la protección contra las violaciones de los derechos humanos. Cuando esas violaciones eran cometidas por empresas militares y de seguridad privadas, las víctimas debían tener acceso a un recurso efectivo. Para asegurar la rendición de cuentas y la justicia en el contexto de las violaciones cometidas por empresas militares y de seguridad privadas eran necesarios un seguimiento y una supervisión sólidos, un cese inmediato de las violaciones y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. En los casos en que ocurrieran violaciones de los derechos humanos, los Estados tenían la obligación de no permitir que quedaran impunes.

¹ Véase www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitarySession6.aspx.

La falta de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos a raíz de haber recurrido a empresas militares y de seguridad privadas, en particular las cometidas en situaciones complejas, planteaba graves preocupaciones. En ese sentido, el Jefe de la Subdivisión recordó las actividades realizadas por el ACNUDH, diversos titulares de mandatos de los procedimientos especiales y el Consejo a que hace referencia el informe del quinto período de sesiones (A/HRC/WG.10/5/2). También destacó la mesa redonda organizada en abril de 2017 por el Grupo de Trabajo sobre los mercenarios, que se había centrado en el impacto de las empresas de seguridad privadas en la situación de los derechos humanos en los lugares de privación de la libertad. Habida cuenta de que la tendencia actual en diversos países apuntaba a que los Estados podían aumentar la práctica de ofrecer contratos a empresas de seguridad privadas para gestionar las prisiones y los lugares de detención, el Jefe de la Subdivisión puso de relieve que eso podía plantear riesgos graves para los derechos humanos. Tenía la esperanza de que los debates del sexto período de sesiones continuaran afianzando la perspectiva de los derechos humanos en el contexto de la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas.

II. Organización del sexto período de sesiones

A. Elección del Presidente-Relator

5. En su primera sesión, celebrada el 22 de mayo de 2017, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta eligió por aclamación a la Representante Permanente de Sudáfrica ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Nozipho Joyce Mxakato-Diseko, como Presidenta-Relatora. A continuación, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta aprobó su programa (A/HRC/WG.10/6/1) y su programa de trabajo.

B. Asistencia

6. Al sexto período de sesiones asistieron los representantes de los siguientes Estados: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Guatemala, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Malasia, Marruecos, Panamá, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de). También asistieron los representantes del Estado de Palestina, de la Unión Europea y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Asistieron, además, representantes de Aspida Risk Management, la Association of World Citizens, el Cercle de Recherche sur les Droits et les Devoirs de la Personne Humaine, el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, Geneva for Human Rights, la Comisión Internacional de Juristas y Villages unis (United Villages).

C. Observaciones introductorias de la Presidenta-Relatora

7. En sus observaciones introductorias, la Presidenta-Relatora destacó que el sexto período de sesiones se centraría principalmente en dar respuesta al mandato dado por el Consejo al grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta. Confiaba en que, al finalizar su sexto período de sesiones, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta formularía una serie de conclusiones y recomendaciones en torno a la posibilidad de crear un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas. La Presidenta-Relatora solicitó a todas las delegaciones que centraran sus intervenciones con ese objetivo en mente.

8. En ese sentido, transmitió su sincero agradecimiento a los coordinadores regionales que habían colaborado con ella ampliamente durante la fase preparatoria del sexto período de sesiones y habían proporcionado aportaciones y contribuciones sustantivas para elaborar el proyecto de programa de trabajo. Además, la consulta oficiosa con los Estados Miembros, celebrada el 15 de mayo de 2017, había brindado otra oportunidad de colaborar directamente con las delegaciones, lo que había contribuido a reducir las diferencias entre estas con respecto a una serie de cuestiones pendientes referentes a las empresas militares y de seguridad privadas. La Presidenta-Relatora también hizo referencia a los documentos que habían sido distribuidos por la Secretaría, a saber, una recopilación de las recomendaciones de los cinco períodos de sesiones anteriores y un documento de debate (véase la sección III *infra*).

9. La Presidenta-Relatora observó que las cuestiones objeto de examen eran complejas y multifacéticas. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas militares y de seguridad privadas tenían que ser abordadas, y era necesario garantizar unos recursos efectivos a todas las víctimas. Los períodos de sesiones anteriores se habían centrado en una serie de cuestiones referentes a esos temas, y en los procesos, los instrumentos y los marcos normativos disponibles a nivel nacional e internacional para afrontar dichas violaciones y ofrecer recursos a las víctimas. Los debates de los anteriores períodos de sesiones también habían ofrecido un panorama general de las lagunas y las áreas en que la comunidad internacional debía realizar más esfuerzos. En vista de todo esto, el proyecto de programa de trabajo elaborado para el sexto período de sesiones consistía en reflexiones sobre los períodos de sesiones anteriores, entre otros aspectos sobre las áreas de convergencia y la comprensión de los procesos y las iniciativas existentes, y sobre los desafíos y las áreas en las que era necesario realizar más esfuerzos. Además, el sexto período de sesiones se dedicaría a redactar las conclusiones y recomendaciones del grupo intergubernamental de trabajo para presentarlas al Consejo. La Presidenta-Relatora expresó su agradecimiento a todas las delegaciones por su colaboración activa e ininterrumpida en este proceso, y manifestó su deseo de que el sexto período de sesiones fuera fructífero.

III. Documento de debate

10. Antes del comienzo del sexto período de sesiones, la Presidenta-Relatora había presentado un documento de debate sobre un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, que contenía los siguientes elementos:

1. Definiciones e interpretaciones

- a) Empresas militares y de seguridad privadas;
- b) Empresas de seguridad privadas;
- c) Empresas militares privadas;
- d) Entornos complejos.

2. Objetivos del marco normativo

- a) Garantizar el respeto de los derechos humanos por parte del sector de las empresas militares y de seguridad privadas que operan en situaciones complejas;
- b) Garantizar la utilización transparente del sector de las empresas militares y de seguridad privadas;
- c) Garantizar que las actividades que realicen esas empresas militares y de seguridad privadas no afecten negativamente a los derechos de las personas.

3. Principios

- a) Eficacia: en vez de limitarse a ofrecer un proceso sin cambios sustantivos, el marco normativo debe tener efectos auténticos, importantes y positivos en el desempeño, para lo cual debe basarse en la regulación por terceros y no en la autorregulación;

b) Carácter inclusivo: el marco normativo debe influir en el desempeño de todas las empresas, no únicamente en el de las que ya cumplan las normas debidas, aunque quizás no lo hagan de un modo totalmente medible y verificable de manera independiente;

c) Transparencia, mediante procesos rigurosos e independientes que abarquen preocupaciones más generales sobre la integridad de los sistemas voluntarios o de autorregulación;

d) Asequibilidad: la regulación debe ser proporcional a las necesidades operacionales, y las empresas solo deberían tener que demostrar que cumplen una norma aceptada y reconocida.

4. Estados contratantes

a) Determinar qué servicios militares/de seguridad no pueden ser contratados por los Estados;

b) Establecer un procedimiento de contratación para las empresas militares y de seguridad privadas que incluya una valoración de la capacidad de cada empresa para prestar sus servicios con arreglo a la ley y criterios de selección sólidos;

c) Incluir requisitos en los contratos gubernamentales para garantizar que se respeten las leyes nacionales, el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicable, y que se preste la orientación pertinente;

d) Realizar un seguimiento y garantizar la rendición de cuentas de las empresas que operan en virtud de un contrato gubernamental, entre otras vías abordando cuestiones de jurisdicción e inmunidad.

5. Estados territoriales

a) Garantizar que el sector de las empresas de seguridad privadas ubicado dentro de su jurisdicción esté controlado y regulado de manera efectiva;

b) Determinar qué servicios no pueden ser desempeñados en su territorio por empresas militares y de seguridad privadas;

c) Establecer un proceso para autorizar la prestación de servicios militares y de seguridad privados que incluya criterios sólidos para la concesión de licencias;

d) Realizar un seguimiento de las empresas militares y de seguridad privadas que operen en el territorio de un Estado.

6. Estados de origen

a) Determinar qué servicios militares/de seguridad no pueden exportarse;

b) Establecer un proceso para autorizar la exportación de servicios militares y de seguridad que incluya criterios sólidos para la concesión de licencias;

c) Regular la conducta de las empresas militares y de seguridad privadas y de su personal;

d) Realizar un seguimiento y garantizar la rendición de cuentas.

7. Estados de nacionalidad

a) Determinar qué servicios militares/de seguridad no pueden ser prestados en el exterior por los nacionales del Estado;

b) Establecer un proceso para autorizar a los nacionales a prestar servicios militares y de seguridad en el exterior, que incluya criterios para la concesión de licencias;

c) Regular la actuación del personal de las empresas militares y de seguridad privadas;

d) Realizar un seguimiento y garantizar la rendición de cuentas;

e) Garantizar el acceso a recursos para las víctimas de las violaciones;

f) Evitar que los ciudadanos y los residentes permanentes trabajen para las empresas militares y de seguridad privadas que no hayan sido sometidas a un proceso de autorización transparente e imparcial, gestionado por un organismo regulador designado.

8. Empresas militares y de seguridad privadas

a) Establecer y aplicar mecanismos de cumplimiento para garantizar que la selección, la verificación de antecedentes y la formación del personal que preste servicios militares o de seguridad estén en conformidad con el derecho nacional e internacional;

b) Establecer mecanismos de reclamación;

c) Supervisar y exigir responsabilidades al personal de empresas militares y de seguridad privadas que incurran en conductas indebidas.

IV. Reflexión sobre los períodos de sesiones anteriores del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, y debate sobre el camino a seguir

11. En sus declaraciones generales formuladas al comienzo del sexto período de sesiones, las delegaciones expresaron su deseo de avanzar en un espíritu de consenso y de cooperación. Pusieron de relieve que la consulta oficiosa celebrada el 15 de mayo de 2017, con anterioridad al sexto período de sesiones, había resultado útil y había permitido a las delegaciones reducir sus diferencias con respecto a una serie de cuestiones pendientes. Las delegaciones también expresaron su agradecimiento por el documento de debate que se había distribuido después de la consulta oficiosa, y por la recopilación de las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta durante sus cinco períodos de sesiones anteriores.

12. Las delegaciones estaban de acuerdo en la importancia de la prevención y la protección frente a las violaciones de los derechos humanos, y pusieron de relieve la importancia de la supervisión y la rendición de cuentas en ese ámbito. El sector de las empresas militares y de seguridad privadas estaba evolucionando rápidamente y los Estados tenían una serie de obligaciones al respecto. El sector privado quería seguridad jurídica, y las víctimas y los defensores de los derechos humanos necesitaban un acceso fiable a recursos mediante mecanismos judiciales y no judiciales. Se puso de relieve la importancia de que, al establecer el camino a seguir, participaran múltiples partes interesadas, pero se convino en que los Estados eran los principales responsables de la adopción de decisiones en el contexto del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta. Durante los cinco períodos de sesiones anteriores había existido acuerdo sobre la necesidad de mejorar la regulación de las empresas militares y de seguridad privadas y hacer frente a las violaciones cometidas por esas empresas. Desde 2011, los Estados habían progresado en la labor de análisis y de abordar las cuestiones relativas al funcionamiento y la regulación de las empresas militares y de seguridad privadas. También se habían realizado progresos respecto de las medidas que los Estados contratantes, los Estados de origen, los Estados territoriales y los Estados de nacionalidad debían adoptar. Los Estados podían prestarse apoyo mutuo si aprovechaban las experiencias, las directrices, los planes de acción, las buenas prácticas, los programas de asistencia jurídica recíproca y los acuerdos modelo de cada uno. Se tenía la esperanza de que el sexto período de sesiones fuera un foro en el que centrarse en cuáles eran los problemas y en qué estrategias estaban funcionando para abordarlos.

13. Algunas delegaciones afirmaron que era fundamental que cualquier marco normativo nuevo complementara y se basara en los procesos, los mecanismos, la legislación y las iniciativas ya existentes, como el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada y la Asociación del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada; el Documento de Montreux sobre las Obligaciones Jurídicas Internacionales Pertinentes y las Buenas Prácticas de los Estados en lo que Respecta a las Operaciones de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas Durante los Conflictos Armados y el Foro del Documento de Montreux; la Guía

Legislativa para Estados sobre la Regulación de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas y la Contract Guidance Tool for Private Security (guía para la contratación de servicios de seguridad privada) preparados por el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas; y la norma internacional ISO-18788:2015, que ofrecía un marco para establecer, poner en práctica, controlar, supervisar, examinar, mantener y mejorar la gestión de las operaciones de seguridad². También se hizo referencia a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (A/HRC/17/31, anexo) y al Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Reparación del ACNUDH, y en particular al Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la mejora de la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales (A/HRC/32/19 y Corr.1, y A/HRC/32/19/Add.1).

14. Algunas delegaciones no estaban convencidas de la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante y consideraban que no había consenso para seguir avanzando hacia la creación de dicho instrumento. Sin embargo, consideraban que el desarrollo de un marco normativo internacional convenía a todas las partes interesadas; sería necesario seguir trabajando para determinar la forma que podía adoptar ese marco. Había un acuerdo generalizado sobre la necesidad de mejorar la actuación de las empresas militares y de seguridad privadas y hacer frente a las violaciones cuando se produjeran. Las delegaciones hicieron referencia al consenso respecto de la distinción entre las empresas militares privadas y las empresas de seguridad privadas, señalaron que cada uno de esos tipos de empresas planteaba sus propios desafíos e instaron al grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta a tener presentes las diferencias entre los dos tipos de empresas. También observaron que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta podría examinar la legislación nacional con miras a determinar las mejores prácticas y la experiencia adquirida.

15. Otras delegaciones solicitaron un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regulara las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, en virtud de las normas internacionales. Expresaron su preocupación por la impunidad actual de las empresas militares y de seguridad privadas, e hicieron referencia a ciertas actividades de esas empresas, como, por ejemplo, la privación de libertad de personas y la participación en el tráfico de armas y en conductas mercenarias, que consideraban producto de la externalización de la guerra a entidades privadas. Afirmaron que las empresas militares y de seguridad privadas eran capaces, en gran medida, de operar fuera de las restricciones impuestas por la supervisión jurídica. Reconocieron que era necesario reforzar el marco normativo y destacaron cuestiones jurídicas relativas a la jurisdicción. Observaron que los instrumentos existentes contenían valiosos pilares de acción, pero que no ofrecían una solución completa. Declararon que, de no existir legislación nacional o en el contexto de una legislación insuficiente o ineficaz, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta debería redactar un documento para presentarlo al Consejo.

16. Dentro del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta empezaba a haber consenso en favor de trabajar sobre la base del documento de debate de la Presidenta-Relatora (véase la sección III *supra*), y un reconocimiento de que avanzar con respecto a este asunto supondría un adelanto significativo en la labor de dicho grupo. El consenso había llevado a las delegaciones a colaborar para definir las posibles próximas medidas que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta podría adoptar, que se presentarían al Consejo en su 36º período de sesiones.

17. El 23 de mayo de 2017, las delegaciones hicieron referencia a un documento que había sido preparado durante el primer día del sexto período de sesiones, respecto del cual las delegaciones habían solicitado instrucciones a sus Gobiernos. Las delegaciones querían acordar una formulación del texto mutuamente aceptable, con miras a que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta pudiera ofrecer conclusiones y recomendaciones para que el Consejo las estudiara. Los delegados señalaron que la labor del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta era urgente porque se estaba acercando el fin de su mandato, y el Consejo necesitaba tiempo para estudiar y

² www.iso.org/standard/63380.html.

debatir el camino a seguir. Según habían acordado los coordinadores regionales en la reunión que habían celebrado el 6 de abril de 2017, la conclusión del sexto período de sesiones se había previsto para el 24 de mayo de 2017, lo que significaba que la labor del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta tenía que concluir en el plazo de tres días, y no de cinco, como había sido el caso en los períodos de sesiones anteriores.

18. Las delegaciones reflexionaron sobre la necesidad de evitar un conflicto o una situación de estancamiento a estas alturas, especialmente en relación con la diferencia de opiniones sobre el posible carácter jurídico de cualquier documento que pudiera llegar a ser propuesto por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta. La Presidenta-Relatora instó a las delegaciones a no anticipar el resultado de cualquier posible deliberación futura del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, y a evitar las divisiones entre las delegaciones sobre la cuestión de si un marco normativo internacional sería jurídicamente vinculante o no. Las delegaciones señalaron que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta había decidido, en aquel momento, congelar el debate sobre si recomendar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante. La “ambigüedad constructiva” de las recomendaciones y las conclusiones era útil en un contexto en el que las delegaciones tenían un abanico de opiniones diferentes.

19. Inicialmente, las delegaciones encontraron dificultades para alcanzar un acuerdo sobre el camino a seguir, y consideraron que la cuestión de incluir referencias a instrumentos y normas existentes pertinentes, como el Documento de Montreux y el Código Internacional de Conducta, planteaba desafíos. Algunas delegaciones eran de la opinión que incluir esas referencias era crucial, pues eran los únicos dos documentos que trataban específicamente de las empresas militares y de seguridad privadas. Otras delegaciones dijeron que esa inclusión no era necesaria, porque se podía redactar un párrafo general que reflejara todos los instrumentos y normas preparados por el sector y por otras partes interesadas, sin citar normas o instrumentos en particular. Se sentían incómodas haciendo referencia a normas e instrumentos concretos que no habían sido redactados y aceptados universalmente o que no formaban parte del proceso de las Naciones Unidas.

20. Tomando nota de la diferencia de opiniones, la Presidenta-Relatora solicitó que las distintas formulaciones se presentaran en un único documento, que se distribuyó posteriormente a las delegaciones. La Presidenta-Relatora destacó que, si no se lograba un consenso al final del segundo día del período de sesiones, sometería a votación las distintas formulaciones porque creía que esa era la forma más democrática de proceder. Las delegaciones declararon que preferían tratar de alcanzar un texto consensuado que pudiera ser presentado al Consejo en calidad de recomendaciones y conclusiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta.

21. Tras un período de reflexión y negociación el 23 de mayo de 2017, las delegaciones fueron capaces de proponer un texto consensuado que tenía en cuenta las diferentes posturas que se habían planteado. La formulación revisada (véase la sección V *infra*) simplificaba el texto que se había debatido anteriormente y resolvía la cuestión de cómo referirse a las partes interesadas pertinentes que tuvieran la experiencia requerida y que pudieran ayudar al grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con su labor posterior.

22. Con anterioridad a la aprobación, el 24 de mayo de 2017, de las conclusiones y las recomendaciones, el representante de Egipto había señalado el compromiso de su país con el mandato otorgado al grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta en lo que se refería a su compromiso con las normas de derechos humanos acordadas en el derecho internacional de los derechos humanos. El representante también señaló el compromiso de Egipto con las Naciones Unidas y los documentos internacionales en los que era parte, y valoró los esfuerzos realizados por las delegaciones para alcanzar un consenso sobre un proyecto de conclusiones y recomendaciones. Con miras a apoyar esos esfuerzos, Egipto había decidido unirse al consenso sobre el texto propuesto, pero reafirmó que entendía que el párrafo 28 b) *infra* se limitaba a invitar a los copresidentes del Foro del Documento de Montreux a contribuir al debate sobre el marco normativo en el marco del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta que se pretendía establecer en virtud de las recomendaciones recogidas en la sección V *infra*, y puso de relieve, asimismo, que no se comprometía con ningún otro documento o proceso en el que no fuera parte y en

cuya preparación no hubiera participado. El representante solicitó que la postura de Egipto se reflejara en el presente informe.

23. El representante de la India se sumó al consenso y apoyó también el proceso. Sin embargo, expresó su preocupación por la inclusión de la expresión “sector de las empresas militares y de seguridad privadas” en el párrafo 28 b) de las recomendaciones *infra*. El representante sugirió que el párrafo 28 b) debería terminar después de la expresión “experiencia pertinente”, y que el resto de la frase no era necesario. La India consideraba inaceptables las referencias al Foro del Documento de Montreux y a la Asociación del Código Internacional de Conducta, porque ambas referencias ya estaban incluidas en el significado de la frase “otras partes interesadas”. El representante solicitó que la postura de la India se reflejara en el presente informe, y señaló que Argelia se sumaba a esa declaración.

24. El representante del Brasil se sumó plenamente al consenso sobre las conclusiones y las recomendaciones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta. Las empresas militares y de seguridad privadas no operaban en un vacío jurídico y el Documento de Montreux ofrecía una recopilación de las normas pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario aplicables a su actividad. No obstante, era evidente que la falta de un instrumento internacional jurídicamente vinculante imponía desafíos mayores al seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, y colocaba a quienes vivían en los Estados territoriales a una mayor probabilidad de sufrir violaciones de los derechos humanos. En consecuencia, el Brasil consideraba que negociar un instrumento internacional jurídicamente vinculante no solo era conveniente, sino también necesario. Tras la constructiva sugerencia de la Presidenta-Relatora, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta había decidido congelar ese debate para avanzar. El Brasil apoyaba ese enfoque conciliador y constructivo, y esperaba que la buena voluntad de participar en negociaciones y debates significativos sobre cuestiones sustantivas con miras a fomentar la confianza y alcanzar un consenso continuara hasta que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta hubiera concluido su importante labor. El representante del Brasil expresó su confianza en que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta pudiera avanzar y ofrecer a todas las sociedades un documento final que abordara correctamente los desafíos pertinentes experimentados en relación con la regulación de las actividades desempeñadas por las empresas militares y de seguridad privadas.

25. El representante del Comité Internacional de la Cruz Roja hizo una observación técnica pero no quiso arriesgarse a poner en peligro el consenso alcanzado por las delegaciones. Con respecto al párrafo 27 b) *infra*, observó que las empresas militares y de seguridad privadas operaban en distintas circunstancias, entre ellas los conflictos armados. Sugirió que en el párrafo 27 b), tras el término “violaciones”, se podría incluir una referencia al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, según procediera. La Presidenta-Relatora preguntó si esa observación técnica podía reflejarse en el informe, en vez de reabrir las negociaciones sobre las conclusiones y las recomendaciones, a lo cual el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja accedió.

V. Conclusiones y recomendaciones

26. El 24 de mayo de 2017, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

27. El grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta:

a) Toma nota de las recomendaciones de los primeros cinco períodos de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta;

b) Reconoce la necesidad de proteger los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos relacionados con las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas;

c) Reconoce la diferencia de opiniones actual sobre la naturaleza de un marco normativo internacional que aborde estas cuestiones;

d) Toma nota de las normas y los instrumentos nacionales, regionales e internacionales, entre ellos los preparados por diversos interesados.

28. El grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta recomienda que el Consejo de Derechos Humanos estudie la posibilidad de establecer un nuevo grupo de trabajo intergubernamental por un período de tres años, con el mandato siguiente:

a) Empezar a elaborar el contenido de un marco normativo internacional, sin prejuzgar su naturaleza, en el marco de los esfuerzos encaminados a proteger los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos relacionados con las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, basándose en el documento de debate sobre los elementos de un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas preparado por la Presidenta-Relatora y en las aportaciones adicionales de los Estados Miembros y otras partes interesadas;

b) Invitar a que contribuyan los Gobiernos, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales y mecanismos del Consejo pertinentes, los órganos de tratados, los grupos regionales, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, el sector de las empresas militares y de seguridad privadas y otras partes interesadas con la experiencia pertinente, entre ellos los copresidentes del Foro del Documento de Montreux y la Asociación del Código Internacional de Conducta.

29. El grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta recomienda, asimismo, que sus conclusiones y recomendaciones se incorporen a una resolución del Consejo de Derechos Humanos.
